



149

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
TUNJA**

Tunja, catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)

MEDIO DE CONTROL: Acción de Repetición
DEMANDANTE: Departamento de Boyacá
DEMANDADO: Olmedo Vargas Sánchez y otros.
RADICACIÓN: 15001 3333 006 **2018 00034 00**

Visto el informe secretarial que antecede y revisado el expediente, se encuentra para resolver sobre la admisión.

I. ADMISIÓN DE LA DEMANDA

1. Medio de Control:

El Departamento de Boyacá, a través de apoderada, promovió demanda de repetición en contra de los señores Olmedo Vargas Sánchez, Gladys Yaneth Mariño, Uriel Barreto Dueñas y Mauricio Giraldo García con el fin de que se les declare civil y patrimonialmente responsables en razón a que mediante acto administrativo se resolvió desvincular del servicio activo a la señora Dora Inés Daza Guerrero y ese actuar dio lugar a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del departamento de Boyacá que culminó con sentencia proferida por este Despacho el 18 de diciembre de 2015.

2. Presupuestos del medio de Control:

2.1. Jurisdicción:

El artículo 104 C.P.A.C.A, dispone que la Jurisdicción Contencioso Administrativa está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

2.2. De la Competencia:

El numeral 8 del artículo 155 C.P.A.C.A que habla sobre la Competencia de los jueces administrativos en primera instancia establece:

“los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

8. De las acciones de repetición que el estado ejerza contra los servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda los 500

salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo en Única Instancia."

En el presente asunto el **Departamento de Boyacá**, estimó la cuantía en la suma de \$20.830.365, es decir, que la cuantía no excede los quinientos salarios mínimos (500 SMLMV) para que sea competencia del Tribunal: Así mismo, se evidencia que el *sub lite* no está atribuido al Consejo de Estado en única instancia (numeral 13 del artículo 149 C.P.A.C.A), razones por las cuales queda claro que este Despacho es competente por el factor funcional para conocer del presente asunto.

Es necesario resaltar que el medio de control de repetición debe tramitarse como una reparación directa, tiene las mismas características y trámite, tal y como lo consagra la Ley 678 de 2001 en su artículo 10º. *"la acción de repetición se tramitará de acuerdo con el procedimiento ordinario previsto en el Código Contencioso Administrativo para las acciones de Reparación Directa"*. Por estas razones, para el caso sub examine, frente a las reglas definidas para establecer la competencia territorial, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 156 numeral 6 del C.P.A.C.A, que establece lo siguiente:

"En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante."

Según la narración de los hechos el lugar donde se produjo la situación fáctica fue el municipio de Tunja, razón por la cual se puede inferir que este Despacho es competente para conocer del presente medio de control, por el factor territorial.

3. Requisitos de Procedibilidad en acciones de Repetición

3.1. Cancelación previa de lo pagado en una condena.

El numeral 5 del art. 161 del C.P.A.C.A establece lo siguiente:

"5. Cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado en una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, se requiere que previamente se haya realizado dicho pago."

En este caso, se aportan copias de comprobantes de egreso No. 2163 en el que consta que se pagó la suma de \$16.130.360 a favor de Dora Inés Daza Guerrero (fl. 209); No. 2146 a favor de la caja de compensación familiar de Boyacá, por valor de \$585.246 (fl. 230); No. 2147 a favor del Instituto Colombiano de Bienestar familiar por \$438.935 (fl. 214); 2148 a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por valor de \$73.156 (fl. 218); No. 2150 a favor de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP– por \$73.156 (fl. 222); No. 2151 a favor del Ministerio de Educación Nacional por \$146.312 (fl. 226).

3.2. De la caducidad de la acción:

El Art 164 numeral 2 literal l) del C.P.A.CA dispone, 2 años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago, o a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. (Ver art 192 ibídem).

Así las cosas se debe indicar que la demanda fue presentada el **3 de abril de 2018 (fl. 12)** ante el Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos, y como se aporta la constancia del día en que se realizó el pago, esto es 17 de febrero de 2017 (antes de que se cumplieran los 18 meses establecidos como plazo máximo para realizar el pago) por lo que al no haber transcurrido los 2 años que consagra la norma es claro que no se configuró el fenómeno de la caducidad.

3.3. De la Conciliación Prejudicial

Según lo dispuesto en el art 161 numeral 1 del CPACA no es requisito de procedibilidad agotar el requisito conciliación prejudicial, a su vez debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la sentencia C-111 de 1999 y el art 37 de la Ley 640 del 2001.

3.4. Requisitos adicionales

Para que proceda esta acción debe existir un fallo condenatorio contra la entidad pública responsable o un auto aprobatorio de la conciliación o acta de conciliación u otro documento que acredite el arreglo –contrato de transacción–, y es indispensable que el valor de la condena o de la conciliación haya sido cancelado (Art. 161 numeral 5 del C.P.A.C.A.).

En relación con lo anterior, al observar el material probatorio arrimado en el libelo, se encuentra copia de las siguientes providencias:

- Sentencia de 18 de diciembre de 2015 proferida por este Juzgado (fls. 19 - 37).

Con la documental aportada se cumple con los requisitos adicionales requeridos en la demanda.

3.5. Legitimación por activa:

Los únicos legitimados para iniciar la acción de repetición son la entidad directamente perjudicada, el Ministerio Público y Ministerio de Justicia, este último frente a entidades del orden nacional. En este caso quien interpone la demanda es el Departamento de Boyacá, entidad directamente perjudicada, a través de apoderado judicial, por lo que se puede concluir que esta legítimamente facultado.

3.6. Legitimación por pasiva:

La Constitución Política consagró que el Estado podrá repetir contra un agente suyo. Son agentes del Estado los Servidores Públicos tales como: miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, y los particulares que desempeñen funciones públicas.

En el presente asunto la demanda está dirigida en contra de los señores Olmedo Vargas Sánchez, Gladys Yaneth Mariño, Uriel Barreto Dueñas y Mauricio Giraldo García, quienes se desempeñaban para el momento de los hechos que dieron origen a la condena como secretario de despacho, directora administrativa de la

secretaría de educación de Boyacá, líder de talento humano y jefe de la oficina asesora jurídica.

3.7. De la legitimación para demandar y la representación judicial:

Interpone la demanda el Departamento de Boyacá, presuntamente afectado quien otorga poder a favor de la abogada Windy Catalina Espinosa Arenas identificada con la C.C. 1.049.618.246 de Tunja y T.P. 278.187 del C.S. de la J, aceptado en la forma prevista en el artículo 74 del C.G.P.; como quiera que cumple con los requisitos legales se le reconocerá personería para actuar como apoderada de la parte actora.

3.8. Del contenido de la demanda y sus anexos:

En el presente caso se cumple con lo dispuesto en el artículo 162, 163 y 166 del C.P.A.C.A., esto es, en cuanto al contenido de la demanda, la individualización de las pretensiones, y los anexos de la demanda.

Por lo anteriormente expuesto, la demanda resulta admisible por reunir los requisitos legales, por lo que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR, con conocimiento en primera instancia, la demanda presentada por el Departamento de Boyacá, en contra de los señores Olmedo Vargas Sánchez, Gladys Yaneth Mariño, Uriel Barreto Dueñas y Mauricio Giraldo García a través del medio de control de repetición.

SEGUNDO: Notificar personalmente esta decisión a los señores Olmedo Vargas Sánchez, Gladys Yaneth Mariño, Uriel Barreto Dueñas y Mauricio Giraldo García, a través de la dirección señalada por la parte demandante en el acápite de notificaciones de la demanda.

TERCERO: Para la práctica de la notificación de la demandada se procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso.

CUARTO: Notificar personalmente este proveído al señor Agente del Ministerio Público a través de la dirección de correo electrónico procjudadm177@procuraduria.gov.co, de conformidad con lo establecido en el inciso 6° del artículo 199 del C.P.A.C.A.

QUINTO: Los gastos procesales que genera la práctica de la notificación personal, correrán a cargo de la parte interesada. Por consiguiente el apoderado de la parte accionante dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este auto, deberá retirar y remitir los oficios a quienes van dirigidos previa elaboración de los mismos por parte de la Secretaría. Surtido lo anterior deberán ser entregadas en el Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos, las constancias de envíos y/o radicación para ser incorporadas al expediente.

SEXTO: Una vez cumplido lo anterior, se correrá traslado a la demandada, por el término de treinta (30) días para los fines establecidos en el Art. 172 del C.P.A.C.A.

151

No obstante, este traslado no empezará a correr hasta el vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación, de conformidad con lo establecido en el inciso 5° del artículo 199 ibídem.

SÉPTIMO: La parte actora deberá tener en cuenta que el traslado establecido en el párrafo segundo del artículo 175 del C.P.A.C.A mediante el cual se corre traslado de las excepciones propuestas por los demandados, servirá para los efectos establecidos en el numeral 1 del artículo 101 del Código General del Proceso, es decir, para subsanar aquellas falencias que han sido advertidas en la contestación de la demanda y que son el sustento de las excepciones previas de carácter dilatorio que se hayan podido proponer.

OCTAVO: RECONOCER personería a la abogada Windy Catalina Espinosa Arenas identificada con la C.C. 1.049.618.246 de Tunja y T.P. 278.187 del C.S. de la J, como apoderada de la parte demandante, en los términos y para los efectos del memorial poder conferido y que obra a folio 1.

NOVENO: Hacer los registros pertinentes en el Sistema de Información Judicial.

Notifíquese y cúmplase.

LAURA JOHANNA CABARCAS CASTILLO
Juez

ms

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N° 32 De Hoy 15 de junio de 2018. A LAS 8:00 a.m.
FERNEY MAURICIO RÍZ HERNÁNDEZ SECRETARIO